

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO: 849
RADICACIÓN: 11001-33-35-027-2013-00601-00
MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO SINGULAR
EJECUTANTE: ANA CECILIA GALVIS TORRES
EJECUTADA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
ASUNTO: Adopta medida de saneamiento y redefine liquidación
del crédito

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Correspondería pronunciarse sobre la objeción formulada por la parte ejecutada el 1° de julio de 2020 a la liquidación del crédito allegada por la parte ejecutante el 18 de mayo de 2018; no obstante, atendiendo a lo previsto en el artículo 207 del CPACA, en concordancia con el artículo 132 del CGP, es necesario adoptar una medida de saneamiento para corregir una irregularidad advertida dentro del presente proceso.

I. ANTECEDENTES

La señora Ana Cecilia Galvis Torres, por conducto de apoderado, instauró demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) y solicitó que se librara mandamiento de pago en los siguientes términos:

"Se libre a favor de la señora ANA CECILIA GALVIS TORRES y en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, representada legalmente por la Doctora GLORIA INÉS CORTES ARANGO, o quien haga sus veces o este designe, mandamiento ejecutivo de pago, por las siguientes sumas de dinero y por los valores relacionados a continuación:

1. Por la suma de VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$21.201.661.07) MCTE, por concepto de intereses corrientes derivados de las sentencias judiciales proferidas por el Juzgado Veintisiete (27) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección "B", debidamente ejecutoriadas con fecha 12 de junio de 2008, los cuales se causaron en el periodo del 13 de junio al 12 de diciembre de 2008, de conformidad con el inciso 5 del artículo 177 del C.C.A., suma que deberá ser indexada hasta que se verifique el pago total de la misma.

2. Por la suma de SESENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$60.227.411.18) MCTE, por concepto de intereses moratorios derivados de las sentencias judiciales proferidas por el Juzgado Veintisiete (27) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección "B", debidamente ejecutoriadas con fecha 12 de junio de 2008, los cuales se causaron en el periodo del 12 de diciembre de 2008 al 29 de febrero de 2011, de conformidad con el inciso 5 del artículo 177 del C.C.A., suma que deberá ser indexada hasta que se verifique el pago total de la misma".

¹ Cfr. Folio 2 del expediente.

Mediante auto del 7 de marzo de 2014 se libró mandamiento de pago en los precisos términos en que fue solicitado por la parte actora (fls. 2 a 75).

Por auto del 17 de abril de 2015 se corrió traslado a la parte ejecutante de las excepciones propuestas por la entidad ejecutada y se le brindó la oportunidad de adjuntar y/o solicitar las pruebas que pretendiera hacer valer (fl. 117).

Al pronunciarse sobre las excepciones, el apoderado de la parte demandante allegó los documentos denominados "cálculo de fallos" y "cálculo de aportes demanda", según los cuales se pagó a la ejecutante dos valores: i) \$146'996.117,19 en la nómina de abril de 2010, y ii) 74'603.616,61 en la nómina de marzo de 2011 (fls. 123 a 126).

En la audiencia inicial, de instrucción y juzgamiento celebrada el 2 de julio de 2015 se dictó sentencia de primer grado, en la cual se precisó lo siguiente:

"Mediante auto del 7 de marzo de 2014 (fls. 72 a 75) se libró mandamiento ejecutivo por ochenta y un millones cuatrocientos veintinueve mil setenta y dos pesos con veinticinco centavos m/cte. (\$81.429.072.25), por concepto de intereses comerciales y moratorios causados en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, es decir, que el actual debate se centra solamente sobre la causación y monto de intereses por el pago tardío de las obligaciones contenidas en el título ejecutivo.

Tal como se precisó anteriormente, obran en el expediente actos administrativos mediante los cuales se ordenó dar cumplimiento a las sentencias que conforman el título base del recaudo, así como soportes de los pagos realizados a la demandante (folios 45 a 50 C1).

Por su parte, el apoderado de la parte ejecutante afirma en el hecho ocho de la demanda (fl. 3) que a la demandante se le abonó la suma de ciento noventa y ocho millones quinientos sesenta y tres mil novecientos ocho pesos con dieciocho centavos (\$198.563.908.18), sin la inclusión de los intereses comerciales y moratorios de conformidad con el inciso quinto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

El Despacho requiere a los apoderados de las partes para que aclaren si el mencionado pago se llevó a cabo. De ser así, determinen la fecha en que se realizó dicho pago.

En consecuencia, el despacho declarará probada la excepción de pago parcial de la obligación por un monto de ciento noventa y ocho millones quinientos sesenta y tres mil novecientos ocho pesos con dieciocho centavos (\$198.563.908.18). Advierte el Despacho que la imputación al pago debe tener en cuenta los lineamientos del artículo 1653 del Código Civil (...).

Así entonces, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales antes reseñados, queda claro que aun vez en firme la sentencia y salvo que se haya concedido un plazo para su cumplimiento, las cantidades liquidadas de dinero allí contenidas devengan intereses de mora a partir de la fecha de la ejecutoria, de tal suerte que el máximo tribunal constitucional eliminó la diferenciación temporal de la causación de intereses corrientes y moratorios contenida en la norma objeto de control constitucional (...).

De otra parte, en lo que tiene que ver con las costas procesales que incluyen las agencias en derecho, no hay lugar a su imposición toda vez que de conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, no está demostrado en el expediente la causación de las mismas (...).

RESUELVE

PRIMERO. Declarar probada la excepción de pago parcial de la obligación por un monto de ciento noventa y ocho millones quinientos sesenta y tres mil novecientos ocho pesos con dieciocho centavos (\$198.563.908.18).

SEGUNDO. Rechazar de plano las excepciones de cobro de lo no debido, ausencia de vicios del acto administrativo demandado, buena fe y la excepción genérica alegada por la defensa de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP -, con base en las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO. Se ordena seguir adelante con la ejecución en los términos contenidos en el mandamiento de pago dictado dentro del presente proceso, descontando de dicho monto el

pago parcial acreditado. Al saldo insoluto que por concepto de intereses moratorios exista a favor de la parte ejecutante, se imputará el valor del pago parcial de la obligación mencionado en el numeral primero de esta providencia (art. 1653 C.C.), y de existir remanente del pago parcial este se aplicará al pago saldo insoluto por concepto de capital indexado, si a ello hubiere lugar.

CUARTO. Sin condena en costas (...)”².

La precitada providencia fue confirmada por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 6 de abril de 2017, en la cual señaló:

“Una vez estudiado con detenimiento el material probatorio obrante en el plenario, la Sala arriba a la conclusión de que le asiste razón al a quo, por cuanto en el plenario existe constancia de que la ejecutada canceló un total de \$198.563.908,18, según se evidencia en los comprobantes de pago obrantes a folios 47 y 51 del expediente, por concepto de pensión gracia, retroactivo y pago de mesadas, pero no existe ninguna evidencia que acredite el pago de los intereses moratorios, además la misma parte ejecutada, en el recurso de apelación, señala que esa entidad no ha cancelado intereses moratorios, por no ser la competente para ese pago, situación esta última que no está en discusión en este proceso.

En consideración a lo expuesto se concluye que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP debe pagar los intereses moratorios que se causaron en el periodo comprendido entre el 13 de junio de 2008 y el 12 de diciembre de 2008”.

La misma Corporación corrigió la sentencia en comento precisando que el reconocimiento de los intereses moratorios corresponde al periodo comprendido entre el 12 de junio de 2008 y el 29 de febrero de 2011 “fecha en la que se efectuó el pago parcial de la obligación, tal como aparece probado a folio 51 del expediente” (fls. 192 y 193).

Por medio de escrito radicado el 18 de mayo de 2018, el apoderado de la ejecutante aportó la liquidación del crédito tomando como la base para liquidar los intereses la suma de \$73'975.397,67 (fls. 197 a 199), de la cual se corrió traslado a la entidad ejecutada por auto del 13 de septiembre de 2018 (fl. 201).

Con todo, a través de providencia del 9 de noviembre de 2018, se requirió a la UGPP y al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (en adelante FOPEP) para que certificaran los pagos realizados a la señora Ana Cecilia Galvis Torres en cumplimiento de las sentencias dictadas el 21 de septiembre de 2007 por este Juzgado y el 29 de mayo de 2008 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso ordinario con número de radicación 25000-23-25-000-2005-08643, y las fechas en que fueron efectuados (fl. 206).

El FOPEP certificó los pagos realizados a la actora por concepto de mesadas pensionales sin que pudiera determinar si tales desembolsos de dinero correspondían al cumplimiento de las sentencias judiciales, documento del cual se destacan dos pagos, a saber: i) por \$202'140.698,76 (que con descuentos queda en \$183'003.047,76) efectuado en noviembre de 2010, y ii) por \$87'407.047,15 (que con descuentos queda en 78'685.696,15) realizado en marzo de 2011 (fls. 212 a 215).

Por su parte, el Subdirector de Defensa Judicial Pensional de la UGPP, a través de oficio del 3 de diciembre de 2018 (fl. 218), allegó copia de la Resolución No. 21896 del 8 de junio de 2009, por la cual se dio cumplimiento a las condenas impuestas en el proceso ordinario, pero no precisó la suma que correspondía al capital adeudado a la señora Ana Cecilia Galvis Torres (fls. 220 a 222), la cual fue modificada por la Resolución No. 010906 del 30 de agosto de 2010, pero sólo en cuanto al valor de la pensión gracia (fls. 223 y 224), oportunidad en la que también allegó el certificado en el cual se reitera la información ya suministrada por dicha entidad (fls. 225 y 226).

² Cfr. Folios 142 a 144 del expediente.

Ahora bien, por medio de oficio radicado el 6 de diciembre de 2018 (fls. 229 a 233) la UGPP manifestó lo siguiente:

"De conformidad con el asunto de la referencia, en donde solicita: (...) certifique los pagos realizados a la señora Ana Cecilia Galvis Torres, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.668.411 expedida en Bogotá, en cumplimiento de las sentencias dictadas el 21 de septiembre de 2007 por este Despacho y el 29 de mayo de 2008 (...).

Conforme a lo solicitado por el Despacho Judicial se informa que, en la nómina de noviembre de 2010 se reporta el retroactivo ordenado por la Resolución No. 21896 de 8 de junio de 2009 emitida por CAJANAL EICE ya liquidada, del cual se anexa liquidación detallada.

Igualmente se anexa liquidación detallada de los valores ordenados mediante la Resolución PAP No. 10906 del 30 de agosto de 2010 emitida por CAJANAL EICE ya liquidada, en la nómina de marzo de 2011".

Debe tenerse en cuenta que en las liquidaciones a que se refiere en el precitado oficio se observan los siguientes valores pagados: i) 74'603.616,61 con inclusión en nómina de marzo de 2011 (fl. 231), y ii) 136'962.426,17, con inclusión en nómina de noviembre de 2010 (fl. 232 anverso).

A pesar de lo anterior, el Subdirector de Defensa Judicial Pensional de la UGPP allegó el oficio del 15 de enero de 2019, acompañado de la constancia expedida por el FOPEP a que se hizo referencia en párrafos precedentes, con valores diferentes a los anunciados en el memorial del 6 de diciembre de 2018 (fls. 234 a 237).

La apoderada sustituta de la UGPP presentó un nuevo memorial el 10 de abril de 2019 informando que mediante Resolución No. RDP 044337 del 19 de noviembre de 2018 se modificó la Resolución No. 21896 del 8 de junio de 2009, así:

"ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la parte motiva pertinente y el artículo SEGUNDO de la Resolución No. 21896 del 08 de junio de 2009, el cual quedará así:

'ARTÍCULO SEGUNDO: Por la Subdirección de nómina de pensionados liquidar las diferencias que resulten entre la resolución No. 25951 de 2005 y lo ordenado por el fallo judicial al cual se da cumplimiento en esta providencia teniendo especial cuidado en deducir las sumas canceladas por vía ejecutiva y/o administrativa previo el trámite que da cuenta el artículo séptimo de la presente resolución.

Parágrafo. El fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional en cumplimiento al fallo objeto del presente acto administrativo pagará lo ordenado en el artículo 178 del CCA y los intereses moratorios en los términos del artículo 177 CCA están a cargo de la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP - a favor del interesado y se liquidarán por la subdirección de Nómina de Pensionados siendo parte integral de esta Resolución la liquidación respectiva.

Una vez sea incluida en nómina la presente resolución, la Subdirección de Nómina de pensionados debe reportar a la Subdirección Financiera la liquidación detallada de los intereses moratorios a fin de que se efectué la ordenación del gasto y el pago correspondiente según disponibilidad presupuestal vigente"³.

Al memorial referido se anexó un nuevo cálculo sobre los valores cancelados a la ejecutante indicando que en la nómina del mes de marzo de 2011 se pagó la suma de \$74'603.616,61 (fl. 248), en el mes de noviembre de 2010 el valor de \$136'962.426,17 (fl. 251) y en el mes de abril de 2010 la suma de \$146'996.117,19 (fl. 255), y nuevamente aportó certificado del FOPEP en el cual los guarismos no coinciden con aquellos previamente citados (fls. 257 a 260).

Por auto interlocutorio del 10 de marzo de 2020 se fijó la liquidación del crédito, en el cual se señaló lo siguiente:

³ Cfr. Folios 244 y 245 del expediente.

"Ahora bien, en el presente caso no se persigue el pago del capital indexado, puesto que ya fue cancelado; sin embargo, sí se presenta una diferencia en cuanto al monto sobre el cual han de calcularse los intereses, pues mientras el libelista elabora la liquidación en la demanda sobre \$198.563.906,18 y en la liquidación del crédito sobre \$73.975.397,67 (sumas sin especificar), este Despacho considera que dicha operación debe hacerse con base en los valores descritos en el documento expedido por la UGPP que denomina 'Cálculo de Fallos' 'RESUMEN FINAL', obrante a folios 123 a 126, en cuyo cómputo se establecen dos valores cancelados por concepto de capital: i) \$146.996.117,19 pagado el 25 de noviembre de 2010, según se extracta del registro de operación expedido por Bancolombia (fl. 47), y ii) \$74.603.616,61 abonado en el mes de marzo de 2011, tal como lo registra el comprobante de pago expedido por el mismo banco (fl. 51), por lo que con fundamento en la facultad contenida en el artículo 430 del Código General del Proceso, se repite, se calculará el monto de los intereses moratorios causados desde el día siguiente al de la ejecutoria (12 de junio de 2008) y hasta el día anterior al primer pago (24 de noviembre de 2010) (...).

Ahora, como la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación expidió la Resolución No. PAP 010906 del 30 de agosto de 2010 (fls. 48 a 50), por medio de la cual modificó la Resolución No. 21896 del 8 de junio de 2009, a través de la cual se dio cumplimiento a las sentencias objeto de ejecución, debe señalarse que al haber incrementado la mesada pensional a \$3.993.104,33, dado que la inicialmente reconocida era de \$3.178.339,50, se procederá a liquidar los intereses sobre las diferencias de capital (\$74.603.617) que fueron canceladas en el mes de marzo de 2011 (...).

En lo que respecta a la indexación de los intereses moratorios hasta la fecha en que se verifique el pago total de la obligación, no se accederá a tal pedimento, en consideración a que mediante auto del 7 de marzo de 2014 por el cual se libró mandamiento de pago, si bien se guardó silencio sobre tal aspecto, la parte ejecutante no solicitó la adición de dicho proveído, denotando con ello su conformidad con esa determinación, de suerte que no es dable volver sobre el punto en esta providencia.

Se condenará en costas a la parte vencida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, y bajo las previsiones del artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, y el Acuerdo No. 1887 de 2003 del C.S.J. (Sentencia del 7 de abril de 2016, Exp.13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-14), Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez), reafirmada por la sentencia del 22 de febrero de 2018, Exp. 250002342000201200561 (0372-2017), Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez".

Por su parte, la apoderada de la UGPP presentó un escrito de objeción a la liquidación del crédito sustentado en una liquidación alternativa de la cual se extrae: i) que la fecha del pago de capital es el 31 de octubre de 2010; y ii) el capital corresponde a \$105'747.045,72; sin embargo, en el mismo documento plantea que la fecha de pago del capital es el 28 de febrero de 2011 y que el valor es \$46'275.574 (fls. 267 anverso y 268).

Al respecto, el apoderado de la parte ejecutante reiteró la liquidación del crédito, según la cual el valor que sirve de base para liquidar los intereses es \$73'975.397,67 (fl. 275).

La Directora de Servicios Integrados de la Atención de la UGPP, mediante oficio del 15 de enero de 2021, arrió la Resolución No. SFO 002310 del 3 de diciembre de 2020, por la cual se ordena pagar por concepto de intereses moratorios y/o costas procesales y/o agencias en derecho el valor de \$17'062.633,34 (fls. 278 a 280).

Finalmente, la apoderada de la UGPP solicitó que se declare la terminación del proceso por haber cancelado la obligación y para el efecto anexó comprobantes de las órdenes de pago presupuestal por valores de \$7'304.453,21 y \$17'062.633,34 (fls. 283 y 284).

II. CONSIDERACIONES

Sea lo primero señalar que la providencia mediante la cual se fijó la liquidación del crédito debe ser objeto de una medida de saneamiento, es decir, dejarse sin valor ni efecto, habida cuenta que: i) el cálculo efectuado para establecer el valor de los intereses no se ajusta a la realidad procesal, y ii) no era viable condenar en costas en ese proveído; aspectos que se abordarán en detalle a continuación:

Sobre la liquidación del crédito

Se procede a establecer la liquidación del crédito contenido en las sentencias del 21 de septiembre de 2007 y 29 de mayo de 2008 proferidas por este juzgado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso ordinario No. 2500-23-25-000-2005-08643-01, en el que fungió como demandante la señora Ana Cecilia Galvis Torres y como demandada la extinta Caja Nacional de Previsión Social Cajanal E.I.C.E., providencias en virtud de las cuales se ordenó re-liquidar la pensión gracia de la actora, incluyendo en la base de liquidación el sueldo básico, la prima de antigüedad, los gastos de representación, la prima técnica, la bonificación por servicios, la bonificación por recreación, la prima semestral, la prima de vacaciones y la prima de navidad, con efectos a partir del 14 de enero de 2005, y se dispuso el pago indexado de lo adeudado y el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. (fls. 10 a 41).

En la audiencia inicial, de instrucción y juzgamiento llevada a cabo el 2 de julio de 2015 se dispuso seguir adelante con la ejecución en los términos contenidos en el mandamiento de pago y que se practicara la liquidación del crédito conforme a las previsiones contenidas en el artículo 446 del Código General del Proceso (fls. 178 a 180).

Una vez en firme las providencias del 6 de abril y 30 de noviembre de 2017, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de las cuales se confirmó la sentencia que declaró probada parcialmente la excepción de pago y se accedió a una solicitud de corrección en la que se precisó que los intereses moratorios se liquidarían desde el 12 de junio de 2008 hasta el 29 de febrero de 2011 (fls. 177 a 181, 192 y 193), el apoderado de la parte ejecutante, a través de memorial radicado el 18 de mayo de 2018 (fls. 197 a 199), presentó la liquidación del crédito por concepto de intereses moratorios y su indexación por un monto de \$70'299.959,047, y surtido el traslado respectivo a la UGPP, esta guardó silencio.

Ahora bien, como el título ejecutivo lo constituyen las sentencias de primera y segunda instancia dictadas bajo las reglas del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), en cuya parte resolutive se dispuso que debían cumplirse en los términos de los artículos 176 y 177, es claro que en lo atinente a los intereses moratorios se regirán por dichos preceptos.

En efecto, el artículo 177 del CCA, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998, rezaba que las condenas impuestas en sentencias serán ejecutables dieciocho (18) meses después de su ejecutoria y las cantidades liquidas reconocidas devengarán intereses comerciales y moratorios, y cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga una condena, sin que el beneficiario haya acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.

Al respecto, es necesario memorar que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-188 del 24 de marzo de 1999 declaró inexecutable las expresiones "durante los seis meses siguientes a su ejecutoria" y "después de este término" contenidas en el aludido artículo 177, lo cual significa que los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación de los dieciocho (18) meses para que la condena sea ejecutable ante la jurisdicción.

En este caso, mediante petición del 3 de septiembre de 2008, radicado ante Cajanal, el apoderado de la parte actora solicitó el cumplimiento de la sentencia proferida por este juzgado el 21 de septiembre de 2007, confirmada por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de mayo de 2008 (fls. 132 a 134), es decir, que la solicitud de cumplimiento de la sentencia objeto de ejecución se radicó dentro de los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y, por ende, los intereses moratorios se causarán a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia hasta el mes anterior a la inclusión del pago en la nómina, pues así lo interpretó la Corte Constitucional y

puntualmente el Consejo de Estado-Sección Segunda en la sentencia del 1º de marzo de 2001, radicación No. 188-00, al analizar lo previsto en los artículos 176 y 177 del CCA.

Por último, con arreglo al artículo 883 del Código de Comercio, el deudor estará obligado a pagar los intereses legales comerciales en caso de mora y a partir de ésta, como se determina en el artículo siguiente.

A su turno, el artículo 884 *ibídem* prevé que cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. El interés bancario corriente se probará con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria (actualmente Financiera).

En el presente asunto se observa que las partes ejecutante y ejecutada han suministrado información imprecisa acerca de los pagos realizados en cumplimiento de las sentencias que dieron origen a este proceso ejecutivo, pues como se expuso en el acápite de antecedentes ninguno de los extremos en litigio se ha puesto de acuerdo frente al monto que ya fue sufragado y mucho menos si ello se imputó al capital o a los intereses generados con posterioridad a que se dispusiera seguir adelante con la ejecución (sentencias del 2 de julio de 2015 y del 6 de abril de 2017).

En ese sentido, es menester efectuar nuevamente la liquidación del crédito acogiendo estrictamente los parámetros plasmados en el mandamiento de pago y en la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución y, de contera, determinar adecuadamente el valor que se adeuda a la ejecutante, de modo que siguiendo ese derrotero se observa que en las aludidas providencias se definió que: (i) el valor del capital corresponde a \$198'563.908,18, suma que fue pagada de manera fraccionada en noviembre de 2010 (\$116'395.208,43) y en marzo de 2011 (\$82'168.697,67), pero sobre el cual no se reconocieron ni pagaron los intereses moratorios; (ii) el respaldo probatorio sobre el pago de ese dinero corresponde a los comprobantes visibles a folios 47 y 51⁴; (iii) la imputación de ese pago debe hacerse en los términos del artículo 1653 del Código Civil⁵, es decir, primero a intereses y luego a capital, pues así lo dispuso la sentencia que dispuso continuar adelante con la ejecución, la cual no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció (art. 285 CGP), por lo que con fundamento en la facultad contenida en el artículo 430 del CGP se calculará el monto de los intereses moratorios causados desde el día siguiente al de la ejecutoria (12 de junio de 2008) hasta el día anterior al primer pago (24 de noviembre de 2010).

PERIODO		RESOLUCIÓN No.	INTERÉS CORRIENTE MENSUAL	INTERÉS DIARIO MORA	INTERÉS MENSUAL DE MORA	NÚMERO DE DÍAS	INTERÉS EFECTIVO ANUAL DE MORA	CAPITAL ADEUDADO A PARTIR DE LA EJECUTORIA	INTERÉS DE MORA
DESDE	HASTA								
13-jun-08	30-jun-08	474	21,92%	0,07791%	2,39725%	18	32,88%	\$198.563.906	\$2.784.772
01-jul-08	31-jul-08	1011	21,51%	0,07664%	2,35767%	31	32,27%	\$198.563.906	\$4.717.703
01-ago-08	31-ago-08	1011	21,51%	0,07664%	2,35767%	31	32,27%	\$198.563.906	\$4.717.703
01-sep-08	30-sep-08	1011	21,51%	0,07664%	2,35767%	30	32,27%	\$198.563.906	\$4.565.519
01-oct-08	31-oct-08	1555	21,02%	0,07511%	2,31015%	31	31,53%	\$198.563.906	\$4.623.655
01-nov-08	30-nov-08	1555	21,02%	0,07511%	2,31015%	30	31,53%	\$198.563.906	\$4.474.505
01-dic-08	31-dic-08	1555	21,02%	0,07511%	2,31015%	31	31,53%	\$198.563.906	\$4.623.655
01-ene-09	31-ene-09	2163	20,47%	0,07339%	2,25652%	31	30,71%	\$198.563.906	\$4.517.464
01-feb-09	28-feb-09	2163	20,47%	0,07339%	2,25652%	28	30,71%	\$198.563.906	\$4.080.290
01-mar-09	31-mar-09	2163	20,47%	0,07339%	2,25652%	31	30,71%	\$198.563.906	\$4.517.464
01-abr-09	30-abr-09	388	20,28%	0,07279%	2,23792%	30	30,42%	\$198.563.906	\$4.336.089
01-may-09	31-may-09	388	20,28%	0,07279%	2,23792%	31	30,42%	\$198.563.906	\$4.480.625
01-jun-09	30-jun-09	388	20,28%	0,07279%	2,23792%	30	30,42%	\$198.563.906	\$4.336.089

⁴ Según lo señalado por el *ad quem* en la sentencia del 6 de abril de 2017. Cfr. folio 180 anverso.
⁵ Conforme con las partes motiva y resolutive de la sentencia del 2 de julio de 2015, Cfr. fls. 143 y 144 del expediente.

01-jul-09	31-jul-09	937	18,65%	0,06760%	2,07681%	31	27,98%	\$198.563.906	\$4.161.242
01-ago-09	31-ago-09	937	18,65%	0,06760%	2,07681%	31	27,98%	\$198.563.906	\$4.161.242
01-sep-09	30-sep-09	937	18,65%	0,06760%	2,07681%	30	27,98%	\$198.563.906	\$4.027.008
01-oct-09	31-oct-09	1486	17,28%	0,06316%	1,93920%	31	25,92%	\$198.563.906	\$3.888.061
01-nov-09	30-nov-09	1486	17,28%	0,06316%	1,93920%	30	25,92%	\$198.563.906	\$3.762.640
01-dic-09	31-dic-09	1486	17,28%	0,06316%	1,93920%	31	25,92%	\$198.563.906	\$3.888.061
01-ene-10	31-ene-10	2039	16,14%	0,05942%	1,82312%	31	24,21%	\$198.563.906	\$3.657.332
01-feb-10	28-feb-10	2039	16,14%	0,05942%	1,82312%	28	24,21%	\$198.563.906	\$3.303.397
01-mar-10	31-mar-10	2039	16,14%	0,05942%	1,82312%	31	24,21%	\$198.563.906	\$3.657.332
01-abr-10	30-abr-10	699	15,31%	0,05665%	1,73767%	30	22,97%	\$198.563.906	\$3.374.849
01-may-10	31-may-10	699	15,31%	0,05665%	1,73767%	31	22,97%	\$198.563.906	\$3.487.344
01-jun-10	30-jun-10	699	15,31%	0,05665%	1,73767%	30	22,97%	\$198.563.906	\$3.374.849
01-jul-10	31-jul-10	1311	14,94%	0,05541%	1,69933%	31	22,41%	\$198.563.906	\$3.411.012
01-ago-10	31-ago-10	1311	14,94%	0,05541%	1,69933%	31	22,41%	\$198.563.906	\$3.411.012
01-sep-10	30-sep-10	1311	14,94%	0,05541%	1,69933%	30	22,41%	\$198.563.906	\$3.300.979
01-oct-10	31-oct-10	1920	14,21%	0,05295%	1,62320%	31	21,32%	\$198.563.906	\$3.259.394
01-nov-10	24-nov-10	1920	14,21%	0,05295%	1,62320%	24	21,32%	\$198.563.906	\$2.523.401
INTERÉS MORATORIO A 24/11/2010								\$117'424.688	

Ahora bien, el primer pago fue \$116'395.208,43, el cual, al efectuarse la imputación, no alcanza a cubrir el valor total de los intereses moratorios causados hasta el 24 de noviembre de 2010, pues queda un saldo insoluto por ese concepto de \$1'029.480,03, mientras que el capital no se vio afectado, por lo que se continuaron generando intereses a partir del día siguiente al pago y hasta el mes anterior al segundo abono (febrero de 2011), así:

PERIODO		RESOLUCIÓN No.	INTERÉS CORRIENTE MENSUAL	INTERÉS DIARIO MORA	INTERÉS MENSUAL DE MORA	NÚMERO DE DÍAS	INTERÉS EFECTIVO ANUAL DE MORA	CAPITAL ADEUDADO A PARTIR DE LA EJECUTORIA	INTERÉS DE MORA
DESDE	HASTA								
25-nov-10	30-nov-10	1920	14,21%	0,05295%	1,62320%	6	21,32%	\$198.563.906	\$630.850
01-dic-10	31-dic-10	1920	14,21%	0,05295%	1,62320%	31	21,32%	\$198.563.906	\$3.259.394
01-ene-11	31-ene-11	2476	15,61%	0,05766%	1,76865%	31	23,42%	\$198.563.906	\$3.548.983
01-feb-11	28-feb-11	2476	15,61%	0,05766%	1,76865%	28	23,42%	\$198.563.906	\$3.205.533
INTERÉS MORATORIO A 28/02/2011								\$10'644.759	

En tal escenario, se observa que la suma del capital y de los intereses moratorios causados hasta el 24 de noviembre de 2010 y luego hasta el 28 de febrero de 2011, arroja la cifra de \$210'238.145,21, a la cual se debe sustraer el valor del segundo pago por \$82'168.697,67, quedando un saldo a pagar de \$128'069.447,56 por concepto de capital.

En lo que respecta a la indexación de los intereses moratorios hasta la fecha en que se verifique el pago total de la obligación, no se accederá a tal pedimento, atendiendo a que quedó extinta con los pagos antes referidos, sin perjuicio de que el saldo insoluto de capital continúe generando intereses y que la entidad ejecutada haya efectuado pagos adicionales a los relacionados en precedencia.

Lo anterior cobra especial relevancia porque en el expediente obran órdenes de pago visibles a folios 283 y 284, documentos que no son suficientes para acreditar la cancelación efectiva del crédito adeudado, dado que no reposa prueba de que los dineros reconocidos en ellos hayan sido desembolsados a favor de la ejecutante, más aún cuando fueron aportados por la Dra. Yulian Stefani Rivera Escobar, a quien se le revocó el mandato que le había sustituido el Dr. José Fernando Torres (apoderado general de la UGPP) como consecuencia de la sustitución del poder que éste le hizo a la Dra. Alida del Pilar Mateus Cifuentes (fl. 270), a quien por cierto se le reconocerá esa calidad.

Sobre la condena en costas

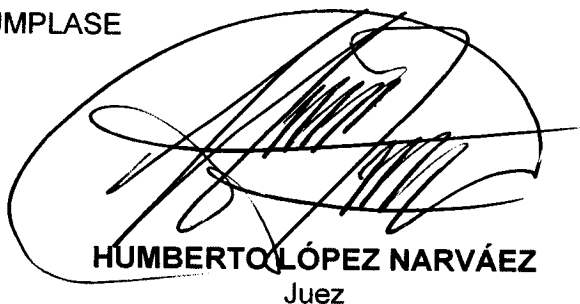
Es claro que no había lugar a condenar en costas en la providencia del 10 de marzo de 2020, que fijó inicialmente la liquidación del crédito (fls. 262 a 264), pues de ello se ocuparon las sentencias del 2 de julio de 2015 proferida por este juzgado y del 6 de abril de 2017 dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, oportunidades en las cuales se abstuvieron de imponerla porque no estaba demostrada su causación, de modo que se dejará sin valor ni efecto dicho proveído por haber dispuesto tal condena en forma inapropiada.

Finalmente, se conminará a las partes para que, en cada caso, adelanten sin demora las gestiones pertinentes con el fin de dar cumplimiento a la presente providencia, en especial a la UGPP, habida cuenta que el inciso 7 del artículo 192 y el párrafo 1° del artículo 195 del CPACA advierten perentoriamente a las autoridades sobre la responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y patrimonial que acarrea el incumplimiento de las disposiciones sobre el pago de los créditos judicialmente reconocidos.

En mérito de lo expuesto, se dispone:

1. DEJAR sin valor ni efecto el auto interlocutorio No. 144 del 10 de marzo de 2020, visto a folios 262 a 264 del expediente.
2. DESESTIMAR las objeciones formuladas por la UGPP a la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante.
3. IMPROBAR la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante.
4. FIJAR el monto de la liquidación del crédito en ciento veintiocho millones sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos con cincuenta y seis centavos (\$128.069.447,56).
5. CONMINAR a las partes para que, en cada caso, adelanten sin demora las gestiones pertinentes con el fin de dar cumplimiento a la presente providencia, en especial a la UGPP, habida cuenta que el inciso 7 del artículo 192 y el párrafo 1° del artículo 195 del CPACA advierten perentoriamente a las autoridades sobre la responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y patrimonial que acarrea el incumplimiento de las disposiciones sobre el pago de los créditos judicialmente reconocidos.
6. ENVIAR copia de esta providencia a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
7. RECONOCER a la Dra. Alida del Pilar Mateus Cifuentes, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.627.008 expedida en Puente Nacional y titular de la tarjeta profesional de abogada No. 221228 otorgada por el Consejo Superior de Judicatura, como apoderada sustituta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en los términos y para los fines conferidos en el poder de sustitución obrante a folio 270 del expediente y; por tanto, se entiende revocado el poder otorgado a la Dra. Yulian Stefani Rivera Escobar, identificada con la cédula de ciudadanía No1.090.411.578 expedida en Cúcuta y titular de la tarjeta profesional de abogada No. 239.922 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, en los términos de los artículos 75 y 76 del CGP.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

JCRC